

Chile o el desencanto consensuado

Geis, Irene

Irene Geis: Periodista chilena. Profesora de periodismo en la Universidad Bolivariana. Corresponsal para Chile del diario *II Manifesto*.

La transición chilena desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-89) hacia la democracia bajo la conducción del democristiano Patricio Aylwin no ha sido apta para corazones tiernos o estómagos delicados.

La transición propiamente tal habría finalizado en agosto último, 18 meses después de iniciada cuando el presidente Aylwin y su vocero Eugenio Tironi, la dieron sorpresivamente por superada, para dar inicio a una nueva etapa caracterizada por una democracia aún susceptible de ser perfeccionada, pero democracia al fin, donde la labor preferencial del gobierno estará dedicada a las «realizaciones» en un marco de «eficiencia».

El homenaje del siglo

El certificado de defunción extendido oficialmente al período de la transición no resulta convincente sin embargo para los sectores de la izquierda que no integran la Concertación de partidos gobernantes y ni siquiera para parte de los socialistas renovados que forman parte de la coalición en el poder. Las razones esgrimidas por estos sectores son múltiples pero apuntan a una sola causa: la transición - se afirma - no pudo o no quiso resolver algunos de los más espinudos puntos que constituyen la herencia de la dictadura las llamadas leyes de amarre - y que fueron el centro de la campaña de propaganda contra el general Pinochet en 1988, año del plebiscito que daría el triunfo a la oposición de la época y que abrió paso a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989.

En ambos períodos, de gran efervescencia política, las ideas-fuerza con que democristianos y socialistas, junto a sus aliados menores (radicales, socialdemócratas, verdes y otros grupos de izquierda) agitaron a las masas, apuntaban explícitamente al desmantelamiento del aparataje político y represivo de la dictadura. A este planteamiento elemental, se sumó la idea-madre de la transición: la reconciliación de los chilenos tras dos décadas de enfrentamientos.

Transcurridos cerca de dos años de gobierno, la Concertación no ha logrado aún acercar a los bandos en pugna (defensores de la Unidad Popular y de la dictadura, en términos simplificados) y sólo ha podido interponerse entre ellos y ejercer el papel de árbitro, en la esperanza de que el tiempo cierre las heridas.

Un reciente discurso del actual Presidente, al conmemorarse el centenario del suicidio del presidente José Manuel Balmaceda y de la guerra civil que a fines del siglo pasado dividió al país en términos similares, cobró nueva vigencia al apuntar a la idea central de Aylwin sobre la necesidad de sepultar el presente hasta que sea pasado, y contuvo un mensaje para los allendistas: el que en cien años más podrían rendir un homenaje a su mandatario, que también se suicidó, así como recién ahora se le rendía uno a Balmaceda.

Símbolos visibles

Pero, apuntan los críticos, al anteponer la idea de la reconciliación a la de justicia, Aylwin habría hecho recaer el peso de la transición sobre las víctimas de la dictadura, con el consiguiente gasto político. En un reciente análisis sobre la transición chilena, el exparlamentario de la Izquierda Cristiana y actual militante del socialismo renovado, Luis Maira, concluía que al cumplir la tercera parte de su mandato de cuatro años, el presidente Aylwin no tiene demasiado que temer de una acción radical proveniente de organizaciones sociales que reclamen un pago más efectivo de la «deuda social» o el castigo de los culpables de las violaciones a los derechos humanos. «Pero tampoco cuenta definitivamente - con el apoyo cálido y articulado de las organizaciones sociales, que tenía al iniciar su gestión».

El gobierno democrático no ha eliminado ni siquiera los símbolos más visibles de la dictadura, como la Antorcha de la Libertad o la avenida 11 de septiembre e incluso ha tenido que tolerar que se agreguen otros nuevos, como la calle Jaime Guzmán, un homenaje al ideólogo del pinochetismo y redactor de la Constitución de 1980, asesinado por desconocidos el 1° de abril, sin que las organizaciones de base hayan logrado un reconocimiento semejante para ninguna de sus muchas víctimas.

En su análisis, Maira utiliza también la palabra «desencanto», la más socorrida hoy cuando se intenta explicar el estado de ánimo predominante.

Al referirse a las organizaciones sociales, Maira sostiene que éstas comienzan a mostrar «distancia y cierto resentimiento» con los partidos democráticos y con el gobierno al ver reducirse en forma inexorable el espacio de su acción política y sus

cuotas de poder y por lo mismo no lograr que se imprima un trance más audaz a la transición. Pero entre ellos - agrega - no surge todavía una alternativa y el desencanto tiende a debilitar en Chile el dinamismo de las corrientes sociales organizadas.

Las organizaciones sociales fueron la columna vertebral de la resistencia a la dictadura militar, al menos en el período 1983-86 y desempeñaron un papel también fundamental en la victoria del «No» en el plebiscito de 1988.

Acuerdos

El Gobierno - se afirma a modo de explicación - se habría rendido a las «leyes de amarre» dictadas por Pinochet en el último año de su mandato. A pesar de haber obtenido el 56 por ciento de los votos, la Concertación de partidos por la democracia no cuenta con mayoría en el Senado. La explicación de este hecho radica en la existencia de nueve senadores «designados» (por la dictadura, en representación de las FF.AA. y otros poderes del Estado) que han obligado al gobierno a implementar una política de «consensos» o una «democracia de los acuerdos» que en la práctica no es otra cosa que arduas negociaciones con los partidos de la derecha - Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) - para lograr la aprobación de sus proyectos.

Algunos acuerdos se han logrado (reforma municipal para permitir elecciones de concejales y ediles el año próximo) pero, generalmente tras largo tiempo y bajo condiciones lesivas para el Gobierno. Al mismo tiempo, no ha sido posible obtener consenso para puntos tan delicados de la transición como la inamovilidad de los comandantes en jefe, que concede la jerarquía en forma vitalicia a Pinochet y le otorga entonces el tutelaje sobre la transición, la existencia de los senadores designados y la composición del Tribunal Constitucional. En uno de sus últimos discursos, Aylwin anunció que estos temas quedarán pendientes para un próximo gobierno que logre el consenso para resolverlos.

Al mismo tiempo - afirma Maira - Aylwin ha centrado sus esfuerzos en lograr una división del bloque conservador formado por los empresarios y los militares, para obtener la confianza de los primeros. Es decir, para desbaratar el riesgo de un nuevo golpe militar ha aceptado continuar con los fundamentos del modelo económico neoliberal establecido por Pinochet y con su instrumental de políticas económicas.

Informe olvidado

Y si bien el Gobierno ha tenido éxito en el control de la inflación (estimada en un 18 por ciento para este año), los muestreos dan a conocer que, con la sola excepción de Patricio Aylwin, instituciones y personas que lo conforman sufren una creciente baja en su popularidad. La más reciente de las encuestas (CEP-Adimark) mostró al Gobierno por primera vez con índices levemente inferiores al 50 por ciento, con un leve repunte en el mes de marzo, cuando se dio a publicidad el llamado «Informe Rettig», un dossier que documenta sobre más de dos mil casos de asesinatos y desapariciones forzadas, llevadas a cabo, según el grupo de juristas que redactó el Informe, por el Ejército utilizando el asesinato como una política oficial del Estado para eliminar la disidencia política. El Informe fue sepultado en el olvido a los pocos días de su publicación, por el asesinato de Jaime Guzmán, del cual el gobierno culpó a los grupos de la izquierda extraparlamentaria, pero que aún permanece impune. La situación llevó al abogado de los derechos humanos, Alejandro Hales, a sostener que el Informe Rettig era «el primer desaparecido de la democracia».

Las encuestas dicen también que el Parlamento no goza de popularidad y que sus miembros son percibidos como «alejados de los problemas cotidianos de los ciudadanos» - la creciente delincuencia, en primer lugar, seguida por las preocupaciones laborales y económicas -. Para Maira, la explicación reside en el hecho de que senadores y diputados no tienen los recursos ni la capacidad para satisfacer las expectativas de sus electores. La antigua presión del mundo social organizado ha perdido sus espacios y el proceso político está cada vez más condicionado por el acceso a la televisión, donde se construyen los liderazgos, y por los resultados de las encuestas.

El movimiento sindical también ha mostrado sus debilidades en esta nueva etapa, principalmente su falta de convocatoria. En 1973, la Central Unica de Trabajadores agrupaba el 37 por ciento de la masa laboral, cifra que actualmente oscila entre el 10 y 12 por ciento. En los últimos seis meses las huelgas organizadas por los trabajadores de los minerales de cobre, de la salud y del magisterio han concluido con magros resultados.

La mayoría de los analistas políticos ha coincidido en apreciar al reciente aniversario del golpe militar, todavía feriado nacional, como más conflictivo y polarizado que el de 1990. Renovación Nacional, que anunció por esos mismos días que al haber concluido la transición daba también por superada la democracia de los acuerdos y que buscaría en adelante un perfil más decididamente opositor, celebró la fe-

cha con una fiesta pública mientras que los militantes de la UDI, enarbolando incluso banderas con la cruz gamada, recorrían en caravana de automóviles la parte alta y pudiente de la ciudad haciendo sonar sus bocinas y profiriendo insultos contra el presidente Aylwin. La izquierda, por su parte, en cantidades mayores de las que se podría imaginar en los actuales momentos, marchó por el centro de la ciudad hacia el cementerio para rendir un homenaje ante la tumba del presidente Salvador Allende. Patricio Aylwin a su vez, y por segundo año consecutivo, optó por abandonar la ciudad tras manifestar que se trataba de «un día muy triste» que divide a los chilenos.

Reconciliación macabra

Un hecho, tal vez menor, da cuenta mejor que otros de las dificultades que enfrenta el Gobierno al intentar imponer la idea de la reconciliación. Al iniciarse el siempre conflictivo mes de septiembre en Chile, cuando se conmemora el aniversario de la elección de Allende el día 4, el golpe militar el 11, el atentado contra Pinochet el 7, la Independencia Nacional el 18 y el Día del Ejército el 19, la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica obtuvo por primera vez una orden judicial para la exhumación de 124 cadáveres sepultados bajo el rótulo de «NN» en el llamado Patio 29 del Cementerio General de Santiago, entre septiembre y diciembre de 1973. El descubrimiento de que en algunos de los ataúdes había dos esqueletos con las huellas de innumerables disparos llevó al general Pinochet a comentar que le parecía «una gran economía» junto con felicitar a los «descubridores de cadáveres». En esos mismos días, la UDI forzaba al gobierno a iniciar acciones legales contra los grupos de izquierda que habían «profanado» la tumba de Jaime Guzmán al cubrirla con desperdicios, en nombre del «debido respeto a los muertos», pero en el enrarecido clima de la transición, ninguna autoridad hizo pública la paradoja y el gobierno se limitó a criticar las palabras de Pinochet como «muy crueles».

Y es que - recuerdan los analistas - el gobierno «autoritario» chileno fue el más fuerte entre sus congéneres del Cono Sur, probablemente - dice Maira - porque intentó una reestructuración más profunda del sistema político, la economía y la sociedad. Más que ninguna otra dictadura de la Seguridad Nacional, la chilena tuvo una dimensión «Fundacional» y ello se proyectó en un quehacer acucioso en todas las esferas, desde la elaboración de una nueva Constitución hasta un activo trabajo de agrupamiento de núcleos populares menos organizados a los que se fue acercando el Gobierno a partir de la actividad de los alcaldes que Pinochet seleccionó entre los jóvenes más destacados de la nueva derecha.

Sin desechar en absoluto el análisis de Luis Maira, otros analistas estiman que el Gobierno sobredimensiona el poder de Pinochet y que incluso lo utiliza como argumento para no avanzar en forma más radical en el proceso de democratización del país. Para estos analistas, la idea de un nuevo golpe militar - al que el gobierno parece temer - aparece como descabellada. El Ejército, el arma más renuente a aceptar la nueva etapa aparece, al menos en el discurso, subordinado al poder civil y además solitario en su posición más disidente. La Fuerza Aérea, con su nuevo comandante en jefe, general Ramón Vega, es percibida como irrestrictamente apegada a la democracia al igual que la policía militarizada de Carabineros, mientras que la Armada se muestra hoy como «profesional» y prescindente en lo político.

Candidatos, presiones y frustraciones

Una eventual candidatura de Pinochet, sin embargo, en las próximas elecciones presidenciales de 1993 no es descartable. El general, que obtuvo el 43 por ciento del sufragio popular al ser derrotado en el plebiscito de 1988, dice que ya no hay tiempo para candidaturas, pero la UDI afirma estar dispuesta a llevarlo como su abanderado en dos años más. El tema de la elección presidencial saltó al tapete antes de tiempo, cuando el senador Eduardo Frei, hijo del presidente del mismo nombre (1964-70) anunció su postulación a la presidencia del partido Demócrata Cristiano en las primeras elecciones directas de esa colectividad a realizarse en noviembre.

La decisión de Frei, que lo convierte en virtual candidato a la primera magistratura, introdujo un factor de inestabilidad en el PDC, donde ya se hablaba públicamente de prolongar el mandato de Aylwin o, en subsidio, buscar una reforma constitucional para permitir su reelección. Algo similar ocurrió en el Partido Socialista, donde se juega con la idea de que el país ya está maduro como para aceptar nuevamente un candidato de esas filas: su líder indiscutido, Ricardo Lagos, actual ministro de Educación.

No está escrita aún la última palabra en Chile. En el terreno económico debe el gobierno enfrentar la acusación de «mediocre» con que lo acosa la derecha y el nuevo liderazgo que estarían asumiendo países como México y Argentina. El economista José Piñera, el padre de la legislación laboral pinochetista y del actual sistema de previsión privado, opina que bajo la actual conducción del ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, el país perdió la oportunidad de mantener el liderazgo continental del libre mercado y que incluso ha retrocedido al introducir reformas como la tributaria, que facilitó poner más énfasis social en la economía mercadista. Para Pi-

ñera, este es sólo un gobierno «de administración» que vive de las glorias del pasado y que será sobrepasado por Argentina.

En el terreno político, el desencanto acumulado de las mujeres, los jóvenes y los pobladores, más la frustración sindical, podría tener consecuencias para la Concertación que hace un año parecía tener asegurada su permanencia en el poder al menos por un período presidencial más. El desencanto, prevén los expertos, podría traducirse en una alta abstención o en el éxito de algún candidato atípico, como el populista empresario Francisco Javier Errázuriz. Sólo Patricio Aylwin, a la luz de las encuestas, podría asegurar a la Concertación un próximo gobierno.